

# **El litigio estratégico ante la justicia electoral. El caso de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero**

Dr. Daniel Tacher Contreras<sup>1</sup>

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

## ***Preparado para presentar en el XXXIV Congreso Internacional de Estudios Electorales: Representatividad y legitimidad en la construcción democrática.***

La justicia electoral ha jugado un papel central en la redefinición de la representación política. A partir de las resoluciones del Tribunal Electoral para garantizar el cumplimiento de las reglas de paridad las estrategias de litigio estratégico y movilización legal se han incrementado como parte del repertorio de los actores que buscan proteger y ampliar sus derechos político-electorales. En este marco, el proceso electoral 2020-2021 marcó un parteaguas para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero quienes incorporaron estrategias judiciales a su demanda por contar con espacios de representación política.

En este trabajo se da cuenta de las diversas estrategias legales adoptadas a nivel federal y local en Guanajuato y Puebla por la ciudadanía mexicana residente en el extranjero para lograr su incorporación a acciones afirmativas, que garantizaron su derecho a la representación política. El trabajo se centra en analizar la estrategia de los actores desde una posición que va más allá de las resoluciones de los tribunales electorales y se da cuenta de diversos actores participantes en lo que puede denominarse una red de movilización legal.

**Palabras clave: voto de los mexicanos en el extranjero; litigio estratégico; Tribunal Electoral**

---

<sup>1</sup> Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (con licencia)  
Contacto: [daniel.tacher@uacm.edu.mx](mailto:daniel.tacher@uacm.edu.mx)  
<https://orcid.org/0000-0003-0566-6963>

## **Introducción**

En 2005, con la aprobación de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que incorporó un libro sexto sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, formalmente se reconoció el derecho a votar desde el extranjero. Aunque se realizaron dos procesos electorales con ese marco legal (en 2006 y 2012) rápidamente mostró sus debilidades y necesidad de adecuación.

Con la reforma política de 2014 se generó un nuevo impulso al ejercicio de los derechos políticos desde el extranjero. Esta reforma tuvo un efecto multiplicador y en nueve años 23 entidades incorporaron el derecho a votar desde el extranjero para sus elecciones a gobernador. Sin embargo, para la ciudadanía en el extranjero el derecho a la representación política seguía siendo un debate abierto.

La demanda por contar con representación política ha sido una de las principales exigencias de la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Esta demanda se ha expresado en diversos repertorios de acción, desde manifestaciones públicas, peticiones formales a autoridades gubernamentales, legislativas y electorales, votaciones simbólicas, entre otras.

Estas acciones se suman a la historia de más de un siglo por el reconocimiento de sus derechos políticos. De acuerdo con Martínez Saldaña (2004: 50) en el marco de la elección presidencial de 1929 los vasconcelistas residentes en Estados Unidos reclamaron formalmente su derecho a votar. Por primera vez, se expresó la transnacionalidad política de los mexicanos en Estados Unidos.

La elección del año 2021, en la que se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se eligieron a 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, 1910 ayuntamientos y 16 alcaldías en la Ciudad de México. Fue la elección intermedia con mayor número de cargos en disputa como resultado de la homologación de calendarios electorales establecido en la reforma política de 2014.

Para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero representó la mayor elección de cargos a nivel local. Se pudo votar desde el extranjero para 9 gubernaturas y para 2 congresos estatales.

En la historia del ejercicio de los derechos la ciudadanía mexicana residente en el extranjero esta elección también implicó el uso del voto electrónico por internet, por lo que se sumó al voto postal como opción para votar desde el extranjero. Además, implicó la materialización del derecho a contar con representación política.

El motor que potenció cambios en el ejercicio de derechos políticos desde el extranjero fue la implementación de un nuevo repertorio de acción enfocado a judicializar y establecer acciones de litigio estratégico contra las decisiones de autoridades legislativas y electorales.

En este texto se analiza las acciones de litigio estratégico como parte del repertorio de acción de las organizaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos. Particularmente se describe el conjunto de acciones que se realizaron hasta llegar a solicitar a la autoridad electoral la implementación de acciones afirmativas y ante la respuesta negativa, su judicialización.

Además, a lo largo del texto se enfatizan los resultados que se tradujeron en cambios significativos que, a nivel local, en la Ciudad de México, que derivó en la constitucionalidad de la figura de la diputación migrante. Esta resolución tuvo un efecto casada que a nivel federal implicó que se incorporará a la ciudadanía residente en el extranjero las acciones afirmativas relacionadas con candidaturas a la Cámara de Diputados.

Por lo que el presente trabajo, tiene por objetivo, mostrar como a través del uso de repertorios de movilización legal la ciudadanía mexicana residente en el extranjero logró generar cambios en el sistema electoral para contar con representación legislativa. Al mismo tiempo genera un cambio en la narrativa que impacto en el uso del litigio estratégico a nivel estatal. Con ello se trasladan al escenario de la justicia electoral sus demandas para mejores y mayores resultados.

## **Repertorios de la movilización legal**

Los movimientos sociales encuentran el uso del discurso legal recursos relativamente maleables que les permiten promover sus agendas e incorporar recursos útiles para la acción política. La movilización legal puede otorgar legitimidad a las demandas de un grupo, elevar el perfil político y social de un problema, modificar la opinión pública y, más instrumentalmente, proporcionar influencia de negociación (Scheingold 1974; Galanter 1983; McCann 1992, 1994).

El enfoque de movilización legal hace hincapié en la comprensión del derecho como una práctica simbólica. Marc Galanter señala que en esta perspectiva la ley es "un sistema de significados culturales y simbólicos más que como un conjunto de controles operativos. Nos afecta principalmente a través de la comunicación de símbolos, proporcionando amenazas, promesas, modelos, persuasión, legitimidad, estigma, etc." (1983, p. 127).

La manifestación más destacada es la incorporación del lenguaje jurídico en los movimientos sociales como referente de la defensa de derechos y permite judicializar la agenda de sus demandas. La existencia de un catálogo de derechos y de mecanismos de revisión establecidos en los textos constitucionales provee el marco institucional para que las cortes adquieran un papel más activo en sus esfuerzos por proteger los derechos y libertades fundamentales, así como expandir su jurisdicción a temas vitales que generan controversias políticas.

Desde los textos de Black (1973), Lempert (1976) y Zemans (1982) encontramos un enfoque dinámico de un marco de referencia sobre la movilización jurídica por parte de individuos que buscan la resolución de disputas en su mayoría "privadas", aunque con efectos que potenciaron cambios en la política pública. Sus contribuciones impulsaron trabajos que se enfocaron a identificar este repertorio de acción desde los movimientos sociales (Handler 1978; Milner 1986; Scheingold 1974). Como acción directa estrategia litigiosa solamente representa una de las alternativas de acción e que implica litigar en instancias nacionales e internacionales; litigar de forma individual con casos estratégicos, o casos individuales emblemáticos, o bien litigios colectivos.

Se reconoce que la movilización jurídica ofrece a los actores sociales un marco de referencia para robustecer sus demandas a los sistemas políticos desde argumentaciones basadas en el catálogo de derechos humanos y mecanismos de revisión previstos en las constituciones. Al mismo tiempo este marco institucional favorece al activismo judicial que hace de las cortes y los jueces nuevos actores políticos involucrados en la definición de temas de la política pública y pone en el centro las agendas de los jueces y las cortes.

En este último caso la perspectiva de la judicialización de la política se centra en la acción de las cortes y los efectos que generan sus resoluciones. No obstante, Rosenberg (1991) concluyó que debido a que los tribunales están "limitados" por una variedad de políticas institucionales, solo pueden producir un cambio social cuando los movimientos sociales activan los mecanismos legales. Aún con estas limitaciones los cálculos políticos de cualquier decisión de política pública no solamente se centran en los posibles resultados, sino que deben considerar las controversias judiciales que pueden desatar y las consecuencias de esa oposición.

McCann (1994, 1999) señala que el estudio de la movilización jurídica deben considerarse las estructuras de oportunidad que son presentadas por el reconocimiento constitucional de los derechos y las decisiones judiciales que son utilizadas instrumentalmente para promover los objetivos políticos de los grupos y movimientos sociales. Sin embargo, cuando movimientos sociales emplean como único repertorio la movilización jurídica corren el riesgo de socavar su papel insurgente en el proceso político, perdiendo así su capacidad de establecer la agenda.

Para que los efectos de la movilización jurídica impacten en la política pública la ventana de oportunidades requiere de al menos tres condicionantes: primero, que existan precedentes legales para el cambio; segundo, que en los poderes legislativos exista receptividad de las decisiones de las cortes y; tercero, que la oposición a las demandas tenga altos costos para incumplir con las resoluciones judiciales.

Los efectos de la movilización legal y las decisiones judiciales permiten analizar cómo las demandas legales y las decisiones judiciales son interpretadas, utilizadas y/o eludidas por actores en diferentes situaciones (líderes de grupos de interés y litigantes, funcionarios gubernamentales, jueces) en comunidades e instituciones legales, sociales y políticas (ver Scheingold 1974; Galanter 1983; McCann 1992, 1994; Mertz 1994).

De acuerdo con Tavera (2020), tal como le ha sucedido a la política, la protesta social se ha judicializado y el espacio jurídico y sus actores se han vuelto, de una forma u otra, parte vital de la política contenciosa. Este proceso de judicialización de la política es un reflejo de la legitimidad que adquieren los mecanismos institucionalizados en el estado para resolver conflictos bajo premisas de protección de los derechos del debido proceso y de la capacidad de exigibilidad legal al ejercicio del gobierno (Tacher, 2019).

La Ley deja de ser vista exclusivamente como un marco jurídico regulatorio y empieza a ser considerada como una vía de participación política. Asimismo, en lugar de pensar al ciudadano como un objeto pasivo del Estado, éste es visto como demandante de derechos y estatus (Tavera, 2020). En este sentido la acción debe conceptualizarse no como una denuncia sino como un recurso “que concibe el sistema judicial como un motor de cambio en la sociedad” (Fabián Sánchez y Jan Perlin (2007).

### **Litigio Estratégico**

El litigio estratégico se ha definido tradicionalmente como el proceso legal en el que se aborda un caso de interés público con un impacto más allá de las partes involucradas. Su objetivo principal es lograr un cambio en la ley o en su aplicación. Para Fabián Sánchez y Jan Perlin (2007) el litigio debe conceptualizarse no como una denuncia sino como un recurso “que concibe el sistema judicial como un motor de cambio en la sociedad”.

A través del litigio estratégico, se insta a los tribunales a fundamentar o redefinir derechos constitucionales existentes, con el fin de aplicar leyes que de otra forma estarían subutilizadas o ignoradas. Está dirigido a “fortalecer la institucionalidad

democrática, es una de las formas en que la sociedad civil organizada articula las demandas respecto al goce de los derechos humanos, y de manera importante, provee un ámbito de debate en donde los tribunales están llamados a encontrar el equilibrio entre intereses de distintos sectores de la sociedad” (Fabián Sánchez y Jan Perlin, 2007).

Marta Villarreal (2007) describe que el litigio estratégico es conocido también como litigio de impacto o como litigio de prueba. El litigio tiene como propósito el cambio social en el campo de las leyes que rigen el Estado de derecho, en el contexto de una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos.

Esta estrategia brinda la oportunidad de promover un debate democrático en torno a un caso específico, en el que activistas legales, la opinión pública, sectores específicos de la población y jueces se involucran para presionar a las autoridades renuentes a tomar medidas y ampliar los derechos de grupos que de otro modo estarían privados de ellos.

En la acción del litigio estratégico Guadalupe Barrera (2007)<sup>2</sup> identifica que el papel central del abogado en el litigio que “no es fortuito”, pues en la decisión de encabezar el asunto debe analizar el contexto, definir el propósito y definir un plan. El litigio estratégico, en su concepción, “es una técnica para impactar en el sistema de justicia en general, a partir de un caso concreto”.

En última instancia, el litigio estratégico empodera a los grupos desfavorecidos y promueve la necesidad de que las poblaciones vulnerables tengan acceso a sus derechos y exijan que el gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El litigio estratégico ha permitido desarrollar acciones jurisdiccionales a favor de ampliar los derechos humanos, en una variedad de temas del interés de organizaciones ciudadanas y de instancias universitarias, que han participado con asesorías y seguimiento de casos. Al litigar, los defensores brindan a los

---

<sup>2</sup> La especialista define cuatro preguntas para quien encabece el litigio: ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación a dónde queremos llegar? ¿Qué factores en el ambiente pueden impactar en esta situación? ¿Qué ruta vamos a seguir?

jueces la oportunidad de cumplir con su deber de hacer valer el marco de derechos y encontrar formas de involucrar a la sociedad civil en el proceso legal. Esto no solo empodera a los defensores, sino que también crea una plataforma para exigir la aplicación de los derechos.

Sin embargo, iniciar una campaña de litigio estratégico no es una tarea sencilla. No todas las acciones legales dirigidas a producir un cambio social están bien planificadas o forman parte de una estrategia más amplia. Su implementación exitosa requiere una evaluación cuidadosa de las condiciones, la naturaleza del problema, la identificación de los objetivos, la adecuación de los recursos disponibles, la construcción de redes y el diálogo social con los jueces.

### **Condiciones para evaluar el potencial del litigio estratégico**

Para evaluar el potencial del litigio estratégico, es necesario considerar algunas condiciones. Se debe evaluar el contexto político, social y legal para determinar si el cambio social puede lograrse a través del litigio. Esta evaluación también determinará el diseño de estrategias legales, de comunicación y de alianzas, en función de la naturaleza del problema y de los recursos disponibles.

Para Cano López (2007) cuando los actores optan un litigio estratégico requiere “identificar las antinomias y lagunas al interior del ordenamiento jurídico, que conlleva una afectación de derechos fundamentales, pero, sobre todo, el actor deberá ser capaz de encontrar soluciones que no rebasen las fronteras del derecho positivo”.

De acuerdo con Charles R. Epp (1998), se deben considerar cuatro condiciones:

- 1) la existencia de un marco de derechos;
- 2) la presencia de un poder judicial independiente y bien informado;
- 3) la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para enmarcar los problemas sociales como violaciones de derechos y litigar; y
- 4) una red de apoyo que aproveche las oportunidades que ofrece el litigio.

Además, es necesario tener en cuenta la necesidad apremiante de una reforma legal que estimula el litigio estratégico. Por otro lado, las acciones legales en sí



mismas provocan reacciones públicas, inspirando demandas, protestas y apoyo que, en última instancia, pueden generar cambios sociales y legislativos.

### **Naturaleza del problema**

Es importante establecer el propósito y las metas que se desean lograr con el caso, identificando los posibles resultados, incluyendo aquellos que podrían ser parcialmente favorables o desfavorables. Esto ayudará a diseñar la estrategia del caso de manera más efectiva. Además, es necesario examinar el enfoque para la presentación del caso, identificando y enmarcando los problemas como violaciones de derechos, aunque no existe una fórmula única para un marco de derechos adecuado.

Recientemente, el PNUD (2022) valoró la experiencia en América Latina del litigio estratégico en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que enfatiza una empatía a “las necesidades y expectativas de acceso a la justicia de las mujeres”; incorporar un “enfoque psicosocial que evite la revictimización”; aprovechar los mecanismos nacionales e internacionales a fin de generar presión en la opinión pública; hacer alianzas para el desarrollo de la estrategia de litigio a fin de aumentar la visibilidad y consolidar la estrategia jurídica.

### **Identificar los objetivos del litigio**

Al momento de identificar los objetivos del litigio, es importante reconocer que no se puede garantizar cómo fallará un tribunal sobre un caso específico. Sin embargo, se debe seleccionar el foro que maximice la probabilidad de éxito y minimice el riesgo de establecer un precedente negativo, especialmente en casos que buscan responsabilizar al Estado. La selección de las instituciones y tribunales responsables debe cuidarse, por lo que los abogados y las organizaciones deben comprender el papel de los jueces y estar familiarizados con resoluciones previas o votos particulares. Esto implica construir argumentos sólidos que desafíen las ideas preconcebidas y logren resultados positivos en la promoción de los derechos y el cambio social.

### **Adecuación de recursos jurídicos**

La adecuación de los recursos disponibles es otro aspecto esencial en el litigio estratégico. En la mayoría de los sistemas donde los jueces son reacios a ejercer con gran discrecionalidad su facultad interpretativa proporcionar argumentos basados en el derecho internacional puede ser una táctica eficaz para lograr una interpretación favorable de la ley existente. Los recursos jurídicos y los precedentes juegan un papel crucial en este proceso.

Diego R. Morales (2010) recomienda considerar los siguientes puntos: 1. Definir el proceso judicial que se utilizará. 2. Considerar las fortalezas y debilidades de la organización, grupo o comunidad en reclamo legal del litigio que se decida iniciar. 3. Establecer un escenario en el que el proceso de litigio que se inicia logre una respuesta a la situación que se demanda atender. En ese sentido, se recomienda proyectar las implicaciones que tendría un litigio exitoso. 4. Valorar la repercusión internacional que pueda generar el litigio, debido a que la opinión pública tiene un papel activo a considerar para los resultados del litigio. 5. Vincular las demandas planteadas por el litigio con un necesario fortalecimiento de los actores involucrados.

### **Construcción de Redes**

La construcción de redes es fundamental para la promoción de un caso estratégico. Los activistas pueden organizar coloquios, presentar *amicus curiae* y enviar publicaciones a los jueces para refutar ideas preconcebidas que podrían influir en su decisión. Asimismo, es importante establecer asociaciones con grupos comunitarios y movimientos sociales, identificando a personas particulares que se hayan visto afectadas por la ley o la política en cuestión y que estén interesadas en iniciar una acción legal.

Como parte del repertorio propio del litigio la vinculación entre actores y con actores resalta acciones como el cabildeo legislativo, *amicus curiae*, la educación a la ciudadanía e intervenciones a favor del cambio estructural (Marta Villarreal, 2007).

La educación de los jueces también desempeña un papel importante en el litigio estratégico. Se puede recurrir a expertos externos para brindar testimonio o

presentar análisis expertos por escrito en el tribunal, especialmente en casos ambientales u otros casos en los que los problemas científicos sean relevantes.

### **Estrategias de comunicación**

La comunicación del litigio estratégico mantiene una práctica informativa a través de vocerías y liderazgos que conocen del tema, a fin de que se construya una agenda en medios de comunicación del asunto que se está judicializando. Los actores partícipes en el litigio estratégico generan actos de comunicación ante la opinión pública. En una experiencia más reciente, movilizan la opinión pública con el uso del internet y de las redes sociales.

La vocería funciona para establecer la agenda del tema y en una dinámica que permite aprovechar oportunidades de la coyuntura que abre un litigio en la agenda pública, así como responder a preguntas puntuales de los públicos interesados y a defender la argumentación entre los actores partícipes en el debate público. En este sentido, quienes abanderan ante medios de comunicación el litigio requieren hacer visible el reclamo, con el objetivo de incorporar el tema de interés en la agenda pública.

Los actores partícipes en el litigio estratégico generan actos de comunicación ante la opinión pública. En una experiencia más reciente, movilizan la opinión pública con el uso del internet y de las redes sociales. La comunicación del litigio estratégico mantiene una práctica informativa a través de vocerías y liderazgos que conocen del tema, a fin de que se contruya una agenda en medios de comunicación del asunto que se está judicializando.

### **El litigio estratégico en la experiencia de México**

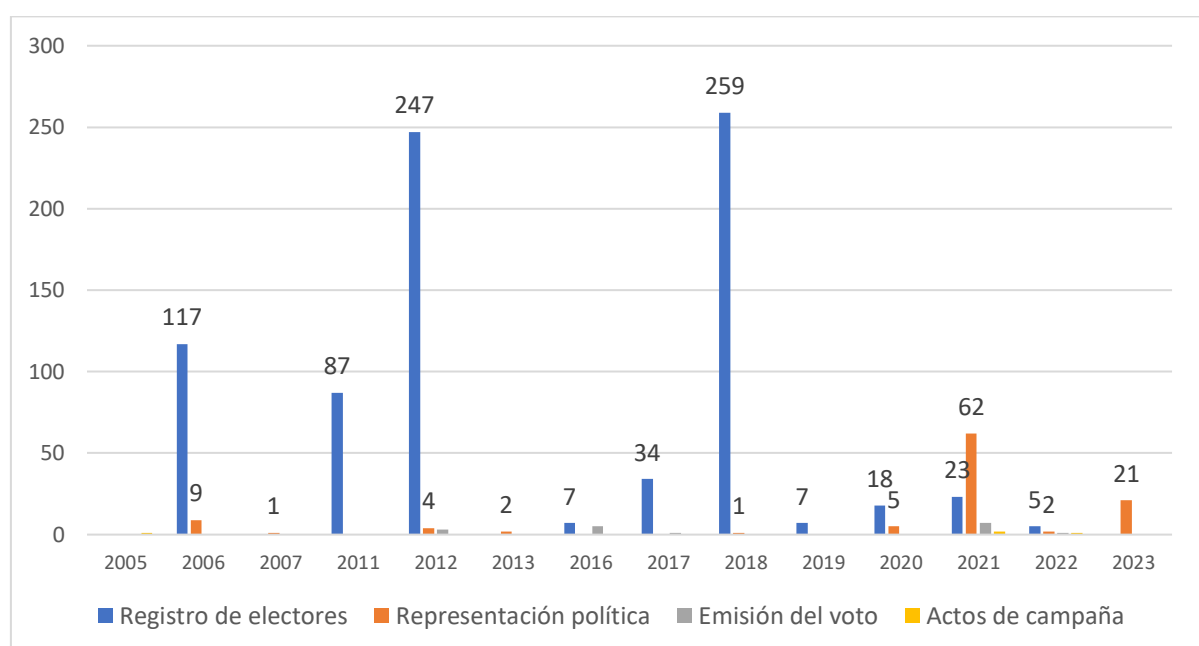
Tom Ginsburg (2016) valora dos elementos en el contexto de México para tener en cuenta sobre el litigio estratégico. El primero tiene que ver con la reforma constitucional de 2011, en la que se enfatizó que la SCJN puede ser un organismo de derechos humanos, ya no un organismo centrado en la “gestión del federalismo”. En segundo término, identifica que los tribunales constitucionales toman decisiones integrando la variable de la reputación que pueden generar en la opinión pública.

Margarita Castilla Peón (2011) identifica, a partir de un sumario de litigios que se han dado ante la SCJN sobre la despenalización del aborto, que fueron relevantes las audiencias públicas y *amicus curiae*. En su consideración, la participación de actores ciudadanos es necesaria porque representa los “ojos pendientes y plumas prestas a identificar y aprovechar las oportunidades para verter de mayor definición en su contenido a nuestros derechos fundamentales”.

### **Mexicanos residentes en el extranjero.**

Desde la reforma legal que introdujo el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en 2005 y hasta el 24 de marzo de 2023 se han recibido un total de 932 asuntos relacionados o interpuestos por este grupo de la población. Los asuntos tienden a incrementarse en el marco de los procesos electorales y, en general, se corresponden con asuntos relacionados con el derecho al voto en materia de registro de electores.

En el marco del proceso electoral 2020-2021 la temática de asuntos que se presentaron modificó el tipo de demandas presentadas. Se incorporaron a las demandas temas relacionados con el derecho a la representación política. Este cambio muestra un dinamismo sobre el uso de mecanismos de litigio estratégico que lograron ampliar el derecho de las personas migrantes a través de acciones afirmativas.



Este avance fue el resultado de factores normativos con un avance progresivo y, por otro lado, la protección jurisdiccional electoral. En el primer caso, se refleja una demanda atendida por el legislador que incorpora lentamente una serie de cambios. En la segunda, un cambio en la estrategia de los grupos que demandan y la intervención de un nuevo actor: el poder judicial. En el caso de México con una jurisdicción especial en materia electoral.

El papel desempeñado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de derechos político-electorales ha sido fundamental. A partir del asunto SUP-REC-88/2020<sup>3</sup>, que restituyó la figura de la diputación migrante en la Ciudad de México, el uso del litigio estratégico por la ciudadanía residente en el extranjero movilizó a diferentes actores individuales y colectivos a presentar asuntos enfocados a la representación política.

En el marco del proceso electoral federal con la resolución del caso SUP-RAP-21/2021<sup>4</sup> que incorporó en las acciones afirmativas a las personas migrantes se desataron diversas acciones de litigio. Entre las más relevantes se encuentra el asunto SUP-JDC-346/2021<sup>5</sup> que estableció con claridad que la acción afirmativa migrante corresponde con la población mexicana que reside en el extranjero, dejando en claro que esta figura solamente atañe a una dimensión del fenómeno migratorio: la salida.

## Ciudad de México

---

<sup>3</sup> El Congreso de la CDMX derogó el derecho a una diputación migrante el 2 de enero de 2020. Doce días después, el 14 de enero, María García Hernández (matrícula consular de Chicago) y Juventino Yitzhak Montiel García (matrícula consular de Chicago) impugnaron la decisión ante el Tribunal local, que confirmó la decisión de los diputados. Figuraron como terceros interesados Juan Carlos Guerrero Anaya y Diana Reyes Ángeles. También participaron en el juicio como *Amicus Curiae* el Observatorio Binacional de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo y el Comité Especializado y el Comité Especializado en torno a la Figura de la Diputación Migrante (CODIM). La Sala Regional Ciudad de México revocó la sentencia del tribunal local; Morena impugnó y finalmente la Sala Superior resolvió a favor de la Sala Regional. Ello ocurrió el 14 de agosto de 2020: [https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REC/88/SUP\\_2020\\_REC\\_88-919807.pdf](https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REC/88/SUP_2020_REC_88-919807.pdf)

<sup>4</sup> La sentencia se asocia al asunto de migrantes a través del SUP-JDC-89/2021, en el que se impugnaron las omisiones del INE hacia los grupos vulnerables. Antecedente es la sentencia SUP-RAP-121/2020, del 29 de diciembre de 2020, que estableció la postulación de personas vulnerables en 21 distritos por el principio de mayoría relativa.

<sup>5</sup> [https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/346/SUP\\_2021\\_JDC\\_346-974353.pdf](https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/346/SUP_2021_JDC_346-974353.pdf)

La Constitución Política de la Ciudad de México promulgada en 2017 refleja la incorporación de perspectivas contemporáneas sobre derechos humanos, interculturalidad y participación ciudadana. Reconoce grupos de atención prioritaria<sup>6</sup> estableciendo políticas de atención preferente para que gocen del pleno ejercicio de sus derechos y alcancen su inclusión efectiva en la sociedad.

En el caso específico de las personas originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero el debate sobre su representación política también fue un paso importante en la extensión de derechos políticos estableciéndose en el artículo 7, numeral 3, lo siguiente:

[...]Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes

Esta disposición abrió paso para que en la legislación electoral pudiera incorporarse una figura representativa. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México definió la figura de diputación migrante y dotó al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para determinar las modalidades para la recepción de esos sufragios, estas disposiciones serían aplicables para el proceso electoral del año 2021.<sup>7</sup>

Sin embargo, el 9 de enero de 2020 se publicó una reforma para derogar la figura de diputación migrante. Para evitarlo dos personas residentes en el extranjero interpusieron un juicio de protección de derechos ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, en la resolución del recurso TECDMX-JLDC-003/2020 el tribunal se declaró incompetente, pues la derogación de la figura de diputación migrante no constituía una violación a derechos relativos a votar, ser votada o votado.

---

<sup>6</sup> Mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; personas de la diversidad sexual; personas migrantes; personas víctimas; personas en situación de calle; personas privadas de la libertad; personas que residen en instituciones de asistencia social; personas afrodescendientes; personas indígenas y minorías religiosas.

<sup>7</sup> Ver Artículo 4, III. Artículo 6, I., Artículo 13, Artículo 76, V., Transitorio Vigésimo Quinto.

Ante la respuesta del tribunal local, el asunto escaló a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. En la resolución del juicio ciudadano SCM-JDC-27/2020 se reconoció que la reforma publicada constituyó una violación a los derechos fundamentales de quienes residen en el extranjero contraria a los principios de progresividad y no regresividad. Se ordenó al IECM reactivar los procedimientos para la implementación de la figura de la diputación migrante para el proceso electoral 2020-2021 y realizar los actos necesarios evaluando las rutas y/o escenarios que ofrecieran la viabilidad necesaria para su consolidación y aplicación.

Sin embargo, el partido Morena presentó un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral con el objetivo de revertir la sentencia. Esta nueva acción no pasó desapercibida por la sociedad civil. Bajo la figura de *Amicus Curiae* (amigos de la corte) Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo<sup>8</sup> y miembros del Comité Especializado en torno a la Figura de la Diputación Migrante (CODIM)<sup>9</sup> se presentaron a audiencias públicas. Finalmente, el 14 de agosto de 2020 la resolución del asunto SUP-REC-88/2020 cerró en definitiva de este asunto revivió jurídicamente la elección de la diputación migrante.

### **Acciones afirmativas en el proceso electoral 2020-2021**

En el proceso electoral federal 2020-2021 el Consejo General del INE emitió los acuerdos INE/CG308/2020 e INE/CG572/2020 relativos al registro de candidaturas y reserva de distritos exclusivos para comunidades indígenas. En ellos se establecieron 21 distritos de 28 reservados para personas indígenas, de los cuales en 11 se postularían mujeres. Sin embargo, estos fueron impugnados por cinco partidos políticos (de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Encuentro Solidario y Acción Nacional) y por un ciudadano.

---

<sup>8</sup> Audiencia pública | SUP-REC-88/2020–amicus curiae Iniciativa Ciudadana A.C., Observatorio Binacional (jueves 25 de junio de 2020), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=MaWqy1UPILE&t=4s>

<sup>9</sup> Audiencia pública | SUP-REC-88/2020–amicus curiae CODIM (viernes 26 de junio de 2020), disponible en: <https://youtu.be/d4KACYLUjy8>

Los seis recursos acumulados y resueltos en el asunto SUP-RAP-121/2020 por la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó los 21 distritos correspondientes a personas indígenas para no dejar al arbitrio de los partidos y colaciones la decisión. Por otro lado, se dio la razón al ciudadano al considerar que los acuerdos eran omisos en incorporar a otros grupos que se encuentran en situación de desventaja en materia de representación política.

La Sala Superior señaló que las acciones afirmativas tenían que garantizar la participación de candidaturas correspondientes a personas que cultural y socialmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se instruyó al Consejo General para diseñar medidas afirmativas para incorporar en forma transversal a otros grupos en esta misma situación.

El Consejo General recibió comunicaciones por parte de organizaciones de residentes en el extranjero y defensores de derechos<sup>10</sup>. Sin embargo, los migrantes residentes en el extranjero no fueron incorporados a estas medidas. Ante la exclusión se presentaron diversos juicios de protección de derechos que se acumularon con otros recursos interpuestos por partidos políticos en el asunto SUP-RAP-21/2021.

El análisis realizado por la Sala Superior se centró en tres temas principales: requisitos de elegibilidad, reglas de campaña y sobre fiscalización y financiamiento. En cuanto a requisitos de elegibilidad “la Sala Superior se ha pronunciado, en repetidas ocasiones, en el sentido de que la finalidad de este requisito consiste en que exista una relación entre la persona representante o gobernante con la comunidad a la que pertenecen las y los electores” (SUP-RAP-21/2021. pág. 63).

En materia de campañas no existe imposibilidad para hacer campaña vía candidaturas de representación proporcional. Finalmente, en cuanto a fiscalización y financiamiento tampoco se encontraron elementos normativos que

---

<sup>10</sup> Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Fuerza Migrante y el Frente Nacional de Inmigrantes



impliquen tratos diferenciados que afecten el ejercicio del derecho a la participación política.

En consecuencia, la Sala Superior vinculó al INE a emitir medidas afirmativas para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en este proceso electoral. En acatamiento el Consejo General del INE estableció en el Acuerdo INE/CG160/2021 los criterios para el registro de, al menos, una fórmula de candidaturas por el principio de representación proporcional, en los primeros diez lugares en cada una de las cinco circunscripciones electorales reservada para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. En estos criterios se estableció que el registro de candidaturas la ciudadanía debía cumplir con algunos de los siguientes elementos que acreditara su pertenencia a la comunidad migrante:

1. Credencial para votar desde el extranjero o;
2. Inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNRE) o;
3. Membresía activa en organizaciones de migrantes y/o haber impulsado o promovido la defensa de los derechos de los migrantes o haber realizado acciones de promoción de actividades comunitarias o culturales entre la comunidad migrante o
4. Cualquier otra documental que pudiera resultar idónea para acreditar el vínculo, sujeta a valoración de esta autoridad.

Con el nuevo acuerdo el INE podía reconocer alguno de estos cuatro elementos como válido para el registro de candidaturas. Sin embargo, esto generó dudas entre la ciudadanía residente en el extranjero, pues se interpretaba que el tercer punto podría cubrirse por personas que no necesariamente fuera parte de la comunidad, o bien que alguna vez hubieran residido en el extranjero. Lo anterior generaba incertidumbre sobre la correcta representación de la comunidad. Por ello se presentaron diversos juicios ciudadanos para la protección de derechos que se acumularon al expediente SUP-JDC-346/2021.

La Sala Superior intervino nuevamente para corregir el acuerdo del INE a fin de determinar con puntualidad que la acción afirmativa tiene como sujetos

beneficiarios a personas residentes en el extranjero. La condición de residencia en el extranjero se debería acreditar con los documentos señalados por el INE o cualquier otro elemento que generara convicción.

En el análisis realizado por Iniciativa Ciudadana (2021) se constata que todos los partidos políticos cumplieron con esta acción afirmativa, que en promedio las candidaturas migrantes ocuparon la octava posición. De esta forma, se cumplió con el objetivo de posibilitar el acceso a los escaños de once diputaciones migrantes, seis mujeres y cinco hombres.

Sin embargo, la principal dificultad a la que se enfrentó el INE correspondió con la documentación presentada podría ser amplia y variada. Este universo de documentos abrió la posibilidad de suplantar candidaturas. Iniciativa Ciudadana (2021) documentó la impugnación de 14% de las candidaturas. Las impugnaciones fueron procedentes en el 57% de los casos. Los partidos más impugnados fueron Acción Nacional<sup>11</sup>, Revolucionario Institucional<sup>12</sup> y Morena<sup>13</sup>.

La experiencia de este conjunto de impugnaciones es que la condición de residencia en el extranjero no es un tema autoadscriptivo, sino una condición que puede constatarse materialmente. En este sentido es necesario considerar un universo limitado y concreto de documentos que acrediten la residencia habitual en el extranjero.

### ***Caso Guanajuato***

Previo al inicio del proceso electoral 2020-2021, Fuerza Migrante, en su carácter de Asociación Civil, solicitó por escrito al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que se realizaran las gestiones necesarias para emitir acciones afirmativas a favor de la comunidad migrante. El (IEEG) dio respuesta, a través del acuerdo CGIEEG/058/2020, donde se da cuenta de la imposibilidad para incorporar la figura de diputaciones migrantes a través de acciones afirmativas. De acuerdo con la interpretación del Instituto la implementación de

---

<sup>11</sup> Juicios con números de expediente SUP-JDC-648/2021, SUP-JDC-815/2021 y SUP-JDC-934-2021.

<sup>12</sup> Juicios resueltos en el expediente SUP-JDC-483/2021 y acumulados.

<sup>13</sup> Expediente SUP-JDC-483/2021 y acumulados.

acciones afirmativas constituye modificaciones fundamentales al proceso electoral.

La respuesta otorgada por el instituto no fue impugnada. Sin embargo, a la luz de los acuerdos del Instituto Nacional Electoral y las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, en marzo de 2021 se reiteró la solicitud para implementar acciones afirmativas. Ante la nueva solicitud el (IEEG) reiteró lo considerado en el acuerdo CGIEEG/058/2020.

Ante la nueva negativa se presentó un juicio de protección de derechos ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) registrado en el expediente TEEG-JPDC-211/2021. En su resolución el TEEG resolvió que la implementación de acciones afirmativas no implica un exceso en la facultad reglamentaria del IEEG. En consecuencia, se revocó el acuerdo impugnado y vinculó al IEEG para realizar un estudio sobre la viabilidad de implementar en el próximo proceso electoral la medida afirmativa solicitada. Para cumplir con lo señalado se otorgó al IEEG un plazo de noventa días hábiles posteriores a la conclusión del proceso electoral.

El 8 de marzo de 2022 se emitió el acuerdo CGIEEG/015/2022 en el que se e da cumplimiento a la sentencia TEEGJPDC-211/2021. Al haberse integrado un comité para el analizar de la viabilidad de implementar acciones afirmativas se presentó el documento *“Estudio para determinar la viabilidad de medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero, para contar con diputaciones migrantes en el Congreso del Estado de Guanajuato para el próximo proceso electoral, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEEG-JPDC-211/2021 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato”*.

Si bien la sentencia del tribunal electoral local solamente vinculó al estudio de la posibilidad de implementar acciones afirmativas para guanajuatenses en el extranjero, la comisión llegó a la conclusión de que las acciones afirmativas podrían extenderse a otros grupos. Se determinó que dichas medidas encontraban viabilidad a favor de las personas con discapacidad, afromexicanas

y de la diversidad sexual, que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad.

En el caso de la ciudadanía guanajuatense residente en el extranjero la comisión sugirió que los partidos políticos y coaliciones postulen al menos una fórmula de candidaturas en la lista de representación proporcional dentro de los primeros cuatro lugares de la lista, para el proceso electoral local 2023-2024.

### ***Caso Puebla***

Los precedentes en materia de acciones afirmativas han servido para la movilización de actores sociales y políticos pertenecientes a diversos grupos en busca de medidas que los incorporen. La organización Fuerza Migrante volvió a ser protagonista de una acción de litigio iniciando con una solicitud realizada al OPL de Puebla para que se dictaran acciones afirmativas para migrantes

La solicitud se realizó en julio de 2019. Sin embargo, el Instituto no dio respuesta a la organización. La persona que se ostentó como representante legal reiteró su solicitud a nombre de la organización Iniciativa Migrante en octubre del mismo año. Nuevamente, ante la falta de respuesta en octubre de 2020 el mismo ciudadano reiteró su solicitud. Aunque el proceso electoral 2020-2021 en Puebla inició el 3 de noviembre de 2020, la respuesta del instituto se expuso en el Acuerdo CG/AC-028/2021 emitido el 8 de marzo de 2021.

Ante la respuesta recibida, los ciudadanos acudieron *per saltum* ante la Sala Superior quedando registrados en el expediente SUP-JDC-341-2021 y acumulado. Sin embargo, a consideración de la Sala Superior el argumento sostenido sobre el retraso en la respuesta obtenida y que esta se emitió en el desarrollo del proceso electoral no era causa suficiente para atenderse por esta vía y, en consecuencia:

La competencia de la Sala CDMX para el análisis de los asuntos implica que es la autoridad jurisdiccional que debe valorar la solicitud de que se exceptúe el requisito de definitividad, de modo que las impugnaciones se conozcan mediante el salto de la instancia local (*per saltum*). Además, no se advierten elementos

que justifiquen la atracción de las impugnaciones por parte de esta Sala Superior. (SUP-JDC-341-2021 y acumulado)

En la Sala Regional los expedientes SCM-JDC-425/2021 y acumulado el estudio de fondo versó sobre las facultades del OPLE para emitir una acción afirmativa de esta naturaleza. Se debe precisar que la solicitud se enfocó a solicitar la implementación de una diputación migrante no de una candidatura migrante. Como se ha visto en los casos de Ciudad de México y Nayarit las diferencias entre escaños reservados y candidaturas preferentes son sustantivos.

En el caso en estudio la Sala Regional señaló que:

para la configuración normativa de la figura de la diputación migrante, se requiere el ejercicio de la actividad legislativa del Estado de origen que permita reconocerles derechos a votar y ser votadas y votados en las elecciones a las personas residentes en el extranjero, que cuenten con un carácter de originarias del Estado legislador. (SCM-JDC-425/2021 y acumulado)

A diferencia de lo acontecido en la Ciudad de México donde la Sala Regional estudió la derogación de la figura de diputación migrante, en este caso la figura no existe en el marco jurídico estatal. Por otro lado, en la Ciudad de México la Constitución expresamente señala que las personas originarias de la entidad aún residiendo fuera del país cuentan con derecho a votar y ser votadas. En cambio, en Puebla el ejercicio al derecho pasivo se encuentra restringido toda vez que para la ciudadanía residente en el extranjero “no existe de manera expresa un reconocimiento a dicha calidad, ni alusión alguna de que las personas residentes en el extranjero deben gozar de los derechos a votar y a ser votadas y votados en elecciones locales” (SCM-JDC-425/2021 y acumulado).

La Sala Regional encuentra que existe un impedimento normativo para que el OPLE pueda operar bajo la figura de acción afirmativa una diputación para migrantes residentes en el extranjero, “porque para que acciones afirmativas como la que se plantea puedan adquirir vigencia y materialización, exigen un soporte normativo, así como un

desarrollo fáctico instrumental proclive para favorecer ese derecho” (SCM-JDC-425/2021 y acumulado). En consecuencia, el recurso fue declarado infundado.

Sin embargo, la sentencia de la Sala Regional abre una ventana para la inclusión futura de diputaciones migrantes toda vez que en su resolutivo establece que:

lo conducente es vincular al Congreso del Estado de Puebla a fin de que, en el marco de sus atribuciones y representación democrática, sea quien se pronuncie sobre la viabilidad de implementar la figura de la diputación migrante en esa entidad federativa para el próximo proceso electoral, para lo cual se otorga un plazo de cuarenta días después de la toma de protesta de la nueva integración de esa soberanía a propósito de los comicios en curso en esa entidad, debiendo informar su decisión a esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles posteriores a que tome la resolución que corresponda (SCM-JDC-425/2021 y acumulado).

Como se puede apreciar nos encontramos ante un asunto que deriva en la vinculación al Congreso estatal para legislar en la materia. Esta vinculación además establece un plazo determinado para llevar a cabo dicha reforma normativa.

### **Conclusiones**

Cuando el Poder Judicial se convierte en el centro de la estrategia para contravenir decisiones gubernamentales ,a partir de controles constitucionales, se pone en el centro de la discusión la legalidad de las acciones gubernamentales y, con ello, dando a la estrategia de litigio una herramienta legítima de acción.

El litigio estratégico es una herramienta que se distingue del proceso de judicialización porque supone una acción concertada de los actores. Sin embargo, en ambos casos implica poner a los tribunales y jueces (normalmente tribunales constitucionales o cortes supremas) en una posición de control en la elaboración de políticas públicas

El litigio estratégico muestra por un lado, la capacidad de actuar independiente del Poder Judicial frente a los otros poderes. Por otro, un repertorio de acción para movimientos, organizaciones sociales, e incluso ciudadanos en lo particular, para enfrentar a las instituciones estatales como medio para garantizar el ejercicio de sus derechos e incluso modificar la forma en que las instituciones desarrollan sus actividades.

Con este marco al analizar las resoluciones del Tribunal Electoral en materia del ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, se puede observar que las resoluciones en el proceso electoral 2020-2021 adquirieron particular relevancia. Estas decisiones potenciaron el ejercicio del derecho a ser votado.

Las resoluciones del Tribunal Electoral mostraron la factibilidad de judicializar las decisiones de las autoridades electorales administrativas para la implementación de acciones afirmativas a nivel local. Inclusive, a través de la protección jurisdiccional, vincular a los Congresos para legislar sobre la materia.

El Tribunal Electoral se convirtió en un actor central en la protección de los derechos políticos de la ciudadanía residente en el extranjero. El avance de los derechos políticos de este grupo se potenció con la incorporación de figuras conocidas como “diputados migrantes”. Estas figuras constituyen escaños reservados en los Congresos.

La estrategia de litigio muestra una ruta viable para grupos en desventaja y, sobre todo, genera un cambio en la narrativa de lucha social que incorpora el lenguaje jurídico y de derechos para lograr sus objetivos. Con ello se trasladan al escenario jurídico sus demandas para mejores y mayores resultados.

### **Bibliografía**

Barrena, Guadalupe (2007) “Oportunidades y retos para el litigio estratégico en México: ¿un cincel para la piedra de Sísifo?”, en *Litigio Estratégico en México: la implicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil*, México, pp. 47-69, disponible en: [https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc\\_pub/litigioestrategico.pdf](https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/litigioestrategico.pdf)

Black, D. J. (1973) "The Mobilization of the Law," *Journal of Legal Studies* 2:125. of Law Reform and Social Change, New York: Academic Press.

Cano López, Luis Miguel y Graciela Rodríguez Manzo (2007) "Del litigio estratégico como experiencia democrática", en *Litigio Estratégico en México: la implicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil*, México, pp. 139-161, disponible en: [https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc\\_pub/litigioestrategico.pdf](https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/litigioestrategico.pdf)

Castilla Peón, Margarita (2011) "El litigio estratégico en México: logros y asignaturas pendientes. *Nexos: El juego de la Suprema Corte*. 3 de mayo, disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-litigio-estrategico-en-mexico-logros-y-asignaturas-pendientes/>

Epp, Charles (2013) *La revolución de los derechos: abogados, activistas y cortes supremas en perspectiva comparada*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Galanter, Marc (1983), 'The Radiating Effects of Courts', in K.D. Boyum and L. Mather (eds), *Empirical Theories of Courts*, New York: Longman, pp. 117- 42.

Handler, Joel F. (1978), *Social Movements and the Legal System: A Theory*

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. (2021) *Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero*, ed. ICPDC, México.

Lempert, R. (1976) "Mobilizing Private Law: An Introductory Essay," *Law and Society Review* 11:173.

McCann, Michael W. (1992), 'Resistance, Reconstruction, and Romance in Legal Scholarship', *Law and Society Review*, 26, pp. 733-49.

McCann, Michael W. (1994), *Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization*, Chicago: University of Chicago Press.

MESECVI, PNUD & Programa Regional de la Spotlight para América Latina (2022). *Guía de experiencias y buenas prácticas de litigio en casos vinculados a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en América Latina*,



disponible en: <https://belemdopara.org/wp-content/uploads/2022/12/Guia-litigio-estrategico-ddhh-mujeres.pdf>

Milner, Neal (1986), 'The Dilemmas of Legal Mobilization: Ideologies and Strategies of Mental Patient Liberation', *Law & Policy*, 8, pp. 105-29.

Morales, Diego R. (2010) “¿Qué es litigio estratégico en derechos humanos?”. *Nexos: El juego de la Suprema Corte*. 7 de julio, disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/%C2%BFque-es-el-litigio-estrategico-en-derechos-humanos/>

Rosenberg, G (1991) *The Hollow Hope*. Cambridge: Cambridge University Press

Sánchez Matus, Fabián y Jan Perlin, 2007, “Introducción”, en *Litigio Estratégico en México: la implicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil*, México, pp. 7-13, disponible en: [https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc\\_pub/litigioestrategico.pdf](https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/litigioestrategico.pdf)

Scheingold, S.A. (1974) *The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change*. New Haven, CT: Yale University Press.

Sentencia SUP-JDC-346/2021 y acumulados. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Parte actora: Aarón Ortiz Santos y otros. Responsable: Consejo General del instituto Nacional electoral. Magistrado: Felipe de la Mata Pizaña. Secretario: Fernando Ramírez Barrios. (2021). México. TEPJF.

Sentencia SUP-RAP-21/2021 y acumulados. Recurso de apelación y juicios para la protección de los derechos político electoral del ciudadano. Parte actora: Partido verde ecologista de México y otros. Responsable: Consejo General del instituto Nacional electoral. Magistrado: Janine M. Otálora Malassis. Secretario: Marcelo Talamas Salazar, Alejandro Olvera Acevedo; Ana Cecilia López Dávila; Olivia y Valdez Zamudio; Nancy Correa Alfaro y Fernando Ramírez Barrios. (2021). México. TEPJF

Sentencia SUP-REC-88/2020. Recurso de Consideración. Parte actora: Morena. Responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en la Ciudad de México Magistrado: Reyes Rodríguez Mondragón. Secretario: Alexandra Danielle Avena Koenigsberger, Ana Cecilia López Dávila, Rodolfo arce corral, José Alberto montes de oca Sánchez y Javier Miguel Ortiz Flores. (2020). México. TEPJF.

SUP-RAP-21/2021 y acumulados. Recurso de apelación y juicios para la protección de los derechos político electoral del ciudadano. Parte actora: Partido verde ecologista de México y otros. Responsable: Consejo General del instituto Nacional electoral. Magistrado: Janine M. Otálora Malassis. Secretario: Marcelo Talamas Salazar, Alejandro Olvera Acevedo; Ana Cecilia López Dávila; Olivia y Valdez Zamudio; Nancy Correa Alfaro y Fernando Ramírez Barrios. (2021). México. TEPJF.

Tacher, Daniel (2019) Judicialización de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tavera Fenollosa, L. (2020). El enfoque de la movilización legal en el estudio de los movimientos sociales. *Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales*, 65(239). <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.239.7545> 7

Zemans, F. K. (1982) "Framework for Analysis of Legal Mobilization: A Decision-Making Model." *American Bar Foundation Journal* 4:989.